



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL SEDE TOLIMA**

**Doctor**  
**JHON LIBARDO ANDRADE FLOREZ**  
**JUEZ ONCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO IBAGUE**  
**E. S. D.**

<b>PROCESO No.</b>	<b>73001333301120180050400</b>
<b>ACTOR</b>	<b>LUZ NIDIA LEAL SANCHEZ Y OTROS</b>
<b>DEMANDADO</b>	<b>NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL</b>
<b>MEDIO DE CONTROL:</b>	<b>REPARACION DIRECTA</b>

**TEMA:** falla prestación de servicios médicos

**NUMAEL DEL CARMEN QUINTERO OROZCO**, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de apoderado de la **NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL**, me permito **CONTESTAR** la REFORMA A LA DEMANDA en los siguientes términos:

**1. OPOSICION A LA PETICION DE LA FORMA A LA DEMANDA**

**FRENTE A LA PRUEBA PERICIAL No 3.**

Nos oponemos parcialmente al decreto de la prueba, si es decretada esta, que sea por intermedio de perito idóneo de la lista de auxiliares de la justicia.

**FRENTE AL INTERROGATORIO DE PARTE DE LOS DEMANDANTE**

Nos oponemos por improcedentes, de acuerdo al art. 184 del código general del proceso, solo se podrá pedir interrogatorio de parte a la contraparte. Y en este caso la misma parte se está llamando a contra interrogar, razón por la cual es improcedente el decreto de esta prueba.

PROCESO No.  
ACTOR  
DEMANDADO  
MEDIO DE CONTROL:

73001333301120180050400  
LUZ NIDIA LEAL SANCHEZ Y OTROS  
NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL  
REPARACION DIRECTA

## 2. PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO A LAS PRETENSIONES

Desde ya me opongo a todas las pretensiones de la demanda con base en los siguientes argumentos:

Conforme a la reiterada jurisprudencia del H. Consejo de Estado, para atribuirle responsabilidad extracontractual al Estado, deben concurrir plenamente demostrados en el plenario los elementos estructurales de la responsabilidad administrativa, por cuanto si bien, cuando el Estado en desarrollo de sus funciones, incurre en la llamada falta o falla del servicio, ya sea por simples actuaciones administrativas, omisiones, hechos u operaciones administrativas, se hace responsable de los daños causados al administrado; esta fuente común y frecuente de la responsabilidad estatal requiere:

1. *Una falla en la prestación del servicio por retardo, irregularidad, ineficiencia, omisión o ausencia del mismo,*
2. *Un daño que configure lesión de un bien jurídicamente tutelado, Y*
3. *Un nexo entre la falla en la prestación del servicio a que la administración esta obligada y el daño.*

Luego, para que la persona pública pueda ser considerada como responsable de un daño, debe haberse producido una actuación que le sea imputable, para que surja entonces la obligación de reparar dicho daño. Pero, como es de conocimiento en cualquier régimen de responsabilidad administrativa, se pueden presentar causales que dada su naturaleza y demostración, pueden conllevar a eximir de responsabilidad a la entidad, cuando queda demostrada, como causa del daño, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero, la fuerza mayor o el caso fortuito, acreditándose entonces que no hay relación de causalidad entre la falta o la falla del servicio y el daño causado.

El Consejo de Estado frente a la responsabilidad del estado ha manifestado *"En cuanto tiene que ver con los elementos cuya acreditación resulta necesaria en el expediente*

*para que proceda declarar la responsabilidad del Estado con base en el título jurídico –subjetivo– de imputación consistente en la falla en el servicio, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido reiterada y uniforme en el sentido de señalar que se precisa de la concurrencia de (i) un daño o lesión de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial, cierto y determinado –o determinable–, que se inflige a uno o varios individuos; (ii) una conducta activa u omisiva, jurídicamente imputable a una autoridad pública, con la cual se incumplen o desconocen las obligaciones a cargo de la autoridad respectiva, por haberle sido atribuidas las correspondientes funciones en las normas constitucionales, legales y/o reglamentarias en las cuales se especifique el contenido obligatorio que a la mencionada autoridad se le encomienda y (iii) una relación o nexo de causalidad entre ésta y aquél, vale decir, que el daño se produzca como consecuencia directa de la circunstancia consistente en que el servicio o la función pública de la cual se trate, no funcionó o lo hizo de manera irregular, ineficiente o tardía”.*

*Ahora bien, no pueden perderse de vista las dificultades que caracterizan la actividad probatoria en procesos como el que mediante el presente pronunciamiento se decide, habida cuenta de que la actividad médica entraña conocimientos técnicos y científicos de difícil constatación que, en determinados supuestos, le impiden al juez tener plena certeza sobre el nexo de causalidad existente entre un específico procedimiento médico y el resultado que al mismo se le pretende imputar. **No obstante, la dificultad que conlleva el análisis de las pruebas en materia médica no faculta al juez para presumir la existencia del aludido nexo causal**<sup>1</sup>*

Está plenamente diáfano para esta defensa, que la Policía Nacional dirección de sanidad actuó en la prestación del servicio médico de la señor Bertha Julieth Mosquera Leal, fue en todo momento adecuada, oportuna, diligente, perita y acorde a la *lex artis ad hoc*. “El proceder de los profesionales de la salud frente a la atención brindada al hijo recién nacido de la señora Bertha Julieth Mosquera Leal se adecuó en estricto sentido a la ciencia médica, las guías y los protocolos, siendo su conducta totalmente ajena a una actuación negligente o reprochable y por lo mismo ausente de responsabilidad. Por lo

---

<sup>1</sup> Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2011, exp.19.192



tanto, Avidanti S.A.S. – Clínica Avidanti Ibagué no ha sido responsable ni directo ni indirecto del presunto daño alegado en esta demanda”<sup>2</sup>.

En igual sentido esta defensa comparte los argumentos esgrimidos por el otro demandado, en el sentido de **INEXISTENCIA DE RELACIÓN DE CAUSALIDAD**, “En los procesos de responsabilidad médica, sean ellos de naturaleza civil o administrativa, para que resulte comprometida la responsabilidad de una persona natural o jurídica, es imprescindible demostrar la existencia de los tres elementos estructurales de la responsabilidad: el daño, el hecho generado del mismo (hecho culposos del profesional de la salud) y el nexo causal que permita imputar el daño a la conducta (acción u omisión) del agente generador de este.

Tal y como lo ha reiterado la jurisprudencia del Consejo de Estado, el nexo causal debe ser probado en todos los casos por quien ejerce el derecho de acción:

“El accionante también tiene que demostrar en juicio la causalidad adecuada entre el daño padecido y la conducta de riesgo imputada al Estado mediante prueba directa o indirecta, porque la ley no ha señalado en materia de relación causal ni presunciones legales respecto de las cuales, probado un hecho (s) el legislador infiera su causalidad adecuada, ni tampoco los conocimientos del juez sobre la realidad social lo autorizan para deducir con certeza el nexo de causalidad eficiente y determinante”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2002, expediente 13477.

“Y debe insistirse en que la presunción de la causalidad será siempre improcedente; aceptarla implicaría incurrir en una evidente contradicción, en la medida en que supondría la aplicación, tratándose de la responsabilidad por la prestación del servicio médico asistencial, de un régimen más gravoso para el demandado inclusive que el objetivo, dado que si bien en éste la falla del servicio no constituye un elemento estructural de la obligación de indemnizar, el nexo causal está siempre presente y la carga de su

---

<sup>2</sup> Contestación de la demanda clínica avidanti



demostración corresponde al demandante, en todos los casos.” Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de julio de 2004, expediente 14696.

### **“LA PRAXIS MÉDICA ES UNA ACTIVIDAD DE MEDIOS Y NO DE RESULTADOS**

En asuntos de responsabilidad médica, debe probarse la falta de diligencia y de cuidado de los profesionales que suministraron servicios que se cuestionan, por lo que para que proceda una eventual condena no basta con el hecho de demostrar que se produjo un perjuicio, en el caso en comento debe probarse que los mismos se produjeron por un actuar negligente, imprudente o imperito.

De no probarse lo anterior no procede condena alguna, puesto que el médico debe desplegar una conducta ajustada a la *lex artis*; pero no se puede pedir a este profesional un resultado específico por ser la ciencia médica una ciencia inexacta y un resultado desfavorable no siempre está asociado a una mala práctica, sino a factores asociados con el paciente, con la evolución incierta de la patología y a otros factores que inciden en un resultado determinado no asociado con las atenciones suministradas. Adicionalmente, en el ordenamiento jurídico colombiano, los deberes legales a cargo de los médicos se encuentran consagrados en la Ley 23 de 1981 y en su decreto reglamentario 3380 del mismo año, normas que definen el ámbito obligacional indicando que los deberes del médico consisten en prodigar todos los medios de manera diligente, prudente, perita, tendientes a tratar de buscar a favor del paciente su curación, sanación y restablecimiento, sin que el profesional de la salud pueda jurídica, fáctica ni científicamente comprometerse con la obtención de un resultado concreto, debido a las múltiples condiciones y reacciones inherentes a cada ser vivo que resultan imposible de predecir y de evitar dentro de toda la cadena que conlleva el proceso de atención, desde el diagnóstico hasta la terapéutica y rehabilitación de ser posibles”.

De tal manera que, no se puede responsabilizar a los profesionales de la medicina por la ocurrencia de un daño cuando estos han actuado de forma diligente, como es el caso del personal médico de Avidanti S.A.S. – Clínica Avidanti Ibagué y la policía nacional.

PROCESO No.  
ACTOR  
DEMANDADO  
MEDIO DE CONTROL:

73001333301120180050400  
LUZ NIDIA LEAL SANCHEZ Y OTROS  
NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL  
REPARACION DIRECTA

## EXCEPCION DE INEXISTENCIA DE PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD

En ese orden de ideas, la jurisprudencia en esta materia ha continuado evolucionando y profundizando sus alcances, con tal propósito en el año 2010, el Consejo de Estado consolidó los siguientes criterios a tener en cuenta en cada caso concreto, cuando se trata de estudiar el daño consistente en la pérdida de chance, a saber:

“De acuerdo con lo anterior, puede sostenerse que los requisitos cuya concurrencia se precisa con el propósito de que pueda considerarse existente la pérdida de oportunidad como daño indemnizable en un caso concreto, son los siguientes:

(i) *Certeza respecto de la existencia de una oportunidad que se pierde, aunque la misma envuelva un componente aleatorio*, lo cual significa que esta modalidad de daño da lugar a un resarcimiento a pesar de que el bien lesionado no tiene la entidad de un derecho subjetivo —pues se trata de un mero interés legítimo, de la frustración de una expectativa, sin que ello suponga que se trata de un daño puramente eventual—, siempre y cuando se acredite inequívocamente la existencia de “*una esperanza en grado de probabilidad con certeza suficiente*” de que de no haber ocurrido el evento dañoso, la víctima habría mantenido la expectativa de obtener la ganancia o de evitar el detrimento correspondientes;

(ii) *Imposibilidad definitiva de obtener el provecho o de evitar el detrimento*, vale decir, la probabilidad de obtener la ventaja debe haberse convertido en inexistente, pues si la consolidación del daño dependiera aún del futuro, se trataría de un perjuicio eventual e hipotético, no susceptible del reconocimiento de una indemnización que el porvenir podría convertir en indebida; lo expuesto se antoja lógico en la medida en que si el resultado todavía puede ser alcanzado, el “chance” aún no estaría perdido y nada habría por indemnizar; por tanto, si bien se mantiene la incertidumbre respecto de si dicho resultado se iba a producir, o no, la probabilidad de percibir la ganancia o de evitar el perjuicio sí debe haber desaparecido definitivamente del patrimonio —material o inmaterial— del individuo porque dichos resultados ya no podrán ser alcanzados jamás.



(...)

(iii) La víctima debe encontrarse en una *situación potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado*, es decir que debe analizarse si el afectado realmente se hallaba, para el momento en el cual ocurre el hecho dañino, en una situación tanto fáctica como jurídicamente idónea para alcanzar el provecho por el cual propugnaba, posición jurídica que *"no existe cuando quien se pretende damnificado, no llegó a emplazarse en la situación idónea para hacer la ganancia o evitar la pérdida"*

(...)

Ya la jurisprudencia de esta Corporación ha hecho alusión a la exigencia de que para la reparación de la pérdida de una oportunidad se demuestre, de manera clara, cuál era la probabilidad que tenía el perjudicado de alcanzar el beneficio que anhelaba o de evitar el detrimento que le fue irrogado, de modo que *"la determinación de la pérdida de la oportunidad no puede ser una mera especulación, es necesario que de manera científica quede establecido cuál era la posibilidad real del paciente de recuperar su salud o preservar su vida, y que esa expectativa real haya sido frustrada por omisiones o erradas acciones en la actuación médica"*.

Por lo anteriormente expuesto el suscrito considera que no se encuentra los presupuestos facticos, para que los demandantes sean indemnizados por un daño, el cual la Policía Nacional por intermedio de SANIDAD y la red externa contratada, **NO ACTUO CON OMISIONES O ERRADAS ACCIONES DE SU ACTUACION MEDICA**, por el contrario, se le autorizo y presto el servicio de salud, cada vez que fue requerido como obra en los soportes documentales allegados en esta contestación

## **CONCLUSIONES AUDITORIA MEDICA HISTORIA CLINICA DE LA SEÑORA BERTHA JULIETH MOSQUERA LEAL E HIJO**

PROCESO No.  
ACTOR  
DEMANDADO  
MEDIO DE CONTROL:

73001333301120180050400  
LUZ NIDIA LEAL SANCHEZ Y OTROS  
NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL  
REPARACION DIRECTA

1. Es importante resaltar que la paciente tuvo múltiples atenciones a lo largo de los años, lo que demuestra la cobertura en salud de forma continua por parte de su EPS.
2. Las atenciones muestran que siempre ha presentado problemas respecto a la obesidad marcada como comorbilidad principal.
3. Siempre que solicitó el servicio se prestó, independientemente de los constantes cambios de domicilio que presentó la usuaria.
4. Asiste a 7 controles prenatales según el registro en su carné prenatal, donde en él también es calificada con obesidad según grafica para la evaluación de la embarazada según IMC.
5. Se envían los laboratorios y ecografías obstétricas pertinentes para el manejo de control prenatal de acuerdo a las guías de manejo.
6. Queda claro que no se observa que el médico general tratante deje escrito la necesidad de realización de cesárea en la historia clínica y donde el mismo profesional aclara cada uno de los tiempos de las diferentes ecografías, tomando la fecha de última menstruación y primera ecografía obstétrica.
7. La paciente en cuestión al entrar al servicio de urgencias del hospital San Rafael del Espinal y es atendida con la mayor brevedad y bajo los protocolos institucionales enmarcados para el caso.
8. **El Hospital San Rafael del Espinal E.S.E realiza a tiempo la remisión del recién nacido, siendo oportuno y eficaz.**
9. **Se concluye que la atención materna fue adecuada, continua y sin falla diagnostica y sujeta a la lex artis.**
10. Se observa la evolución tórpida del menor, debido a su hipertensión pulmonar, lo que afectó rápidamente su salud, viendo cómo se realizó todo el desarrollo médico posible para mejorar su estado, pero con el pasar de las horas sus órganos no respondieron, lo que provoca su muerte.
11. la muerte neonatal según la historia clínica del recién nacido está relacionada con la posible sepsis secundaria a infección de vías urinarias materna causante de la falla cardiaca.
12. Se contaba con los contratos actualizados para la época con cada una de las instituciones prestadoras de salud, los cuales atendieron a la paciente.

PROCESO No.  
ACTOR  
DEMANDADO  
MEDIO DE CONTROL:

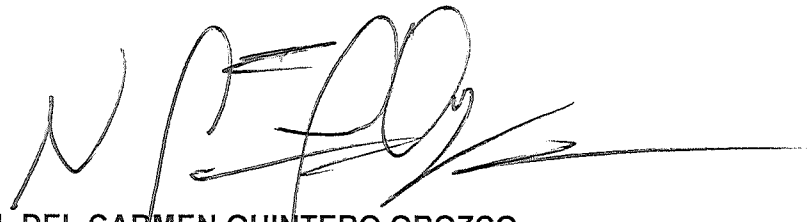
73001333301120180050400  
LUZ NIDIA LEAL SANCHEZ Y OTROS  
NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL  
REPARACION DIRECTA

**Por lo anterior me opongo a la reforma de la demanda:**

### **PETICIÓN**

Por todo lo anterior, solicito al señor Juez desestime todas y cada unas de las pretensiones de la demanda y en su lugar exonere de cualquier tipo de responsabilidad administrativa a la Policía Nacional.

Del Señor Juez,



**NUMAEL DEL CARMEN QUINTERO OROZCO**  
C.C. 7.574.705 de Valledupar  
T.P. 260.508 C.S.J.





Doctor:

**JOHN LIBARDO ANDRADE FLOREZ**

Juez Once Administrativo Del Circuito Judicial De Ibagué

E. S. D.

**MEDIO DE CONTROL:** Reparación Directa

**DEMANDANTE:** YEISON ORLANDO RODRIGUEZ REYES y otros

**DEMANDADOS:** LA NACION COLOMBIANA, POLICÍA NACIONAL, E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL y el INSTITUTO DEL CORAZON DE IBAGUE -DIACORSA- ahora CLINICA AVANTI IBAGUE.

**RADICACION:** 73001-33-33-011-2018-00504-00

**ASUNTO:** REFORMA DE LA DEMANDA

DAVID RODRIGUEZ GIRALDO, mayor de edad y vecino de Ibagué, identificado civil y profesionalmente como se registra al pie de mi correspondiente firma, obrando en condición de apoderado de los actores dentro de las diligencias de la referencia, comedidamente me permito presentar **ESCRITO DE REFORMA DE DEMANDA**, en los siguientes términos:

**EN CUANTO A LAS PRUEBAS:**

Me permito modificar y adicionar la siguientes:

FRENTE A LA PRUEBA PERICIAL:

**PERICIAL 3**

Solicito al Honorable Despacho, que por remisión al CGP conforme lo expuesto en el artículo 227 del CPACA, se de aplicación al artículo 227 del Código General del Proceso, otorgándose al Dr. José Luis Herrera Rendon, un término prudencial, que en todo caso sea superior a diez (10) días hábiles, a fin de que previa valoración del Historial Clínico emita dictamen pericial dentro del proceso de la referencia.

Lo anterior teniendo en cuenta que el Dr. Herrera Rendon es Médico Cirujano con una vasta experiencia en la ciencia de la salud teniendo en cuenta que es Magister en Calidad de la Prestación de Servicios de Salud, Master en Gestión Clínica de la Seguridad del Paciente y Calidad de la Atención Sanitaria de la Universidad de la Rioja (España), Especialista en Gestión de la Calidad y la Normalización Técnica, Especialista en Gerencia de la Comunicación Corporativa, Especialista en Gestión Humana de las Organizaciones, Especialista en Gerencia de Servicios de Salud, Especialista en Gestión Pública, Aspirante al Título de Experto Universitario en Gestión del Conocimiento y Procesos en la Organización y Estudiante de post grado para optar al Título de Especialista en Responsabilidad Medica, con lo que se evidencia que es un profesional

DAVID RODRÍGUEZ GIRALDO  
Abogado  
Especialista en derecho administrativo y constitucional – U. Católica -  
Especialista en Derecho Probatorio – U. Católica –  
Especialista en Responsabilidad Civil y del Estado – U. de la Sabana –



idóneo para emitir concepto especializado en salud respecto de los hechos que en el presente proceso se debaten.

Esta solicitud se efectúa teniendo en cuenta que, por la complejidad del asunto y la extensión de la historia clínica, sumado a las circunstancias especialísimas por las que atraviesa el país y el mundo entero relacionadas con la emergencia sanitaria por la propagación del COVID-19, el profesional de la salud no tuvo la posibilidad de culminar el Dictamen Pericial dentro del término previsto para la presentación de la reforma de la demanda ya que tiene otras ocupaciones de índole laboral que se lo impidieron.

#### **TESTIMONIALES:**

Solicito al Honorable Despacho, se sirva fijar fecha y hora para que se lleve a cabo la recepción del testimonio de:

- **LUIS ALFREDO NUÑEZ GIRALDO**, mayor y vecino del municipio del Espinal, identificado con la C.C. No. 1.033.705.598, quien puede ser notificado en la Cra 3 # 6-70 Barrio Betania del municipio del Espinal o al correo electrónico [lualnugi0311@gmail.com](mailto:lualnugi0311@gmail.com).

A este testigo le constan aspectos importantes relacionados con la vida personal, laboral, familiar y de ciertas circunstancias de la víctima principal así como de los actores; es por ello que ruego al Honorable Despacho, se sirva decretar la práctica y recepción del mismo, para el esclarecimiento de la verdad real y procesal.

#### **DECLARACION DE PARTE:**

Solicito a su señoría se sirva escuchar en declaración de parte a los demandantes que se relacionan a continuación:

- YEISON ORLANDO RODRIGUEZ REYES
- BERTHA JULIETH MOSQUERA LEAL

Con todo respeto y comedimiento, se suscribe de Usted.

Cordialmente,

**DAVID RODRIGUEZ GIRALDO**  
CC No. 93.395.575, de Ibagué.  
TP No. 156681 del C.S. de la J.